

C.A. de Concepción

Concepción, cinco de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Que en los presentes antecedentes, **RIT N° O-42-2022**, **RUC N° 22-4-0411423-2**, del Juzgado de Letras del Trabajo de Lota, **Rol N° 450-2023** de esta Corte de Apelaciones, se dictó sentencia con fecha 08 de junio de 2023, en virtud de la cual se decide no hacer lugar a solicitud de la demandada de aplicar la sanción del artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo; no hacer lugar a la excepción de incompetencia planteada por la demandada en todos sus escritos de contestación; no hacer lugar la excepción de caducidad planteada por la demandada; no hacer lugar a excepción de prescripción principal de seis y subsidiaria de dos años planteada por la demandada; y se hace lugar a las demandas interpuestas en las causas RIT O-42- 2022, RIT O-53-2022 y RIT O-72-2022, acumuladas todas a la RIT O-42-2022, declarando que la demandada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA contrajo en favor de todos los demandantes individualizados en los considerandos segundo, tercero y cuarto del mismo fallo, la obligación laboral contractual de aumentar sus remuneraciones de manera indefinida desde agosto de 2016 de \$15.000 para aquellos actores trabajadores que cuentan con una antigüedad como Asistentes de la Educación de 0 a 3 años y \$30.000 mensual para aquellos actores trabajadores que cuentan con una antigüedad como Asistentes de la Educación de 3 años y 1 mes a 15 años y de 15 años 1 mes a 35 años: se declara que a la fecha de la demanda todos los demandantes poseen más de 3 años de antigüedad y el aumento de remuneraciones de todos ellos corresponde a \$30.000 desde que la sentencia quede firme y hacia el futuro; se declara que los demandantes no están



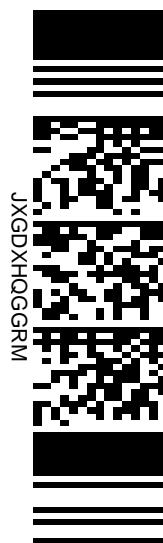
obligados a devolver las sumas ya percibidas; se condena a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA, al pago de las prestaciones laborales adeudadas a los demandantes, en la forma y montos que se detallan en el considerando sexto del mismo fallo; todo lo anterior con intereses y reajustes del artículo 63 del Código del Trabajo y hasta la fecha efectiva del pago, sin costas.

En contra de la mencionada sentencia recurre de nulidad Aniela Bastidas Salgado, por la parte demandada, solicitando la invalidación del fallo, en virtud de la causal del artículo 477 inciso 1°, parte final del Código del Trabajo, dictando la correspondiente sentencia de reemplazo por estimar primeramente que existe infracción a las normas sobre competencia del Tribunal Laboral del artículo 420 del Código Del Trabajo y ley 21.280; como segunda causal infracción de ley, esta vez a los artículos 51 y 52 de la Ley 18695 Orgánica Constitucional De Municipalidades, artículo 4 ley 19.464 estatuto del personal no docente, artículo 6 de la ley 10336 Orgánica Constitucional De La Contraloría. y artículo 177 del Código De Procedimiento Civil; como tercera causal, infracción al artículo 168 del Código del Trabajo en relación al artículo 453 del mismo texto legal, al no aplicar la caducidad; y como cuarta infracción, la vulneración del artículo 510 del Código del Trabajo, al no considerar el tribunal la prescripción de dos años.

Alega que de este modo se ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, por cuanto si se hubiera dado aplicación a los artículos y leyes señalados, se hubiera llegado a la conclusión de rechazar la demanda interpuesta en su contra.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su vista, oportunidad en la que se escucharon los alegatos de las partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

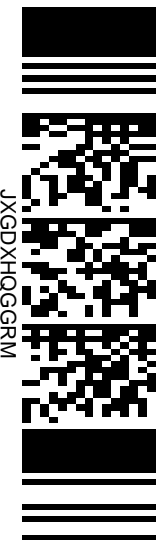


1.- Que el recurrente funda su recurso de nulidad en la regla contenida en el artículo 477, inciso 1º, segunda parte, del Código del Trabajo, es decir, cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de ley, que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Al efecto se contiene una pretensión principal, concerniente a una supuesta infracción al artículo 420 del Código Del Trabajo y la ley 21280; seguidamente, desarrolla en subsidio y por tres veces la misma causal, cada una de las veces en forma subsidiaria de la anterior, enfocada ahora en infracción a los artículos 51 y 52 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional De Municipalidades, artículo 4º ley 19.464 estatuto del personal no docente, artículo 6º de la ley 10.336 Orgánica Constitucional de La Contraloría y artículo 177 del Código De Procedimiento Civil; luego infracción a los artículos artículo 168 y 453, ambos del Código del Trabajo; y finalmente, vulneración del artículo 510 del Código del Trabajo, al no considerar el tribunal una prescripción de dos años.

Por todo lo anterior, pide se acoja el recurso de nulidad; se invalide la sentencia recurrida, dictándose un fallo de reemplazo que con nuevos fundamentos, acoja sus pretensiones rechazando la demanda interpuesta en su contra.

2.- Que el recurso de nulidad, como medio extraordinario de impugnación de decisiones jurisdiccionales que es, constituye un arbitrio de derecho estricto que, por ajustarse con rigor a la normativa especial que lo regula, su procedencia se encuentra limitada en primer término por la naturaleza de las resoluciones impugnables; en segundo lugar, por la configuración de las causales expresamente establecidas en la ley; y finalmente por el cumplimiento de las formalidades que se deben respetar al efecto,

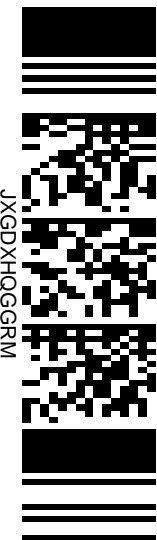


en especial, la debida fundamentación y la existencia de peticiones específicas, todo lo cual fija el alcance de la competencia del tribunal llamado a resolver.

3.- Sobre la causal de nulidad contenida en la segunda parte del inciso primero del artículo 477 del Código del Trabajo, como reiteradamente se ha resuelto, las infracciones legales pueden tener lugar en tres oportunidades, que son: cuando no se aplica al caso concreto una norma que sí corresponde aplicar; cuando se aplica de manera errónea o deficiente la norma en cuestión, o finalmente, cuando su aplicación resulta desviada, dejando de regir en una situación específica que en principio se encuentra dentro de su ámbito de aplicación o a la inversa, siendo aplicada en un caso en que ello no está previsto o legalmente no corresponde.

4.- Que la parte recurrente, primeramente alega se ha infraccionado el artículo 420 del Código del Trabajo, desde que estima que la regla general es que las normas del Código del Trabajo no se apliquen a los empleados públicos, quienes han de regirse por sus normas estatutarias pertinentes, en este caso, la Ley 19.464.

Agrega que a partir del año 2020, en virtud de una modificación legal contenida en la ley 21.280, se admite excepcionalmente la aplicación del procedimiento de tutela de derechos fundamentales respecto de funcionarios públicos. En concreto, interpreta legalmente el artículo 485 del Código del Trabajo, zanjando definitivamente la discusión acerca de la aplicación de este procedimiento a los funcionarios públicos, concluyendo así que a los empleados públicos, solo se les aplica del Código del Trabajo, el procedimiento de tutela, y otras



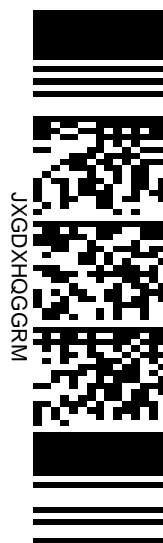
instituciones, no siendo de dichas características, las acciones deducidas, procedía que el a quo declarase su incompetencia.

Sin embargo, la sentencia impugnada, en su considerando trigésimo a trigésimo tercero, desarrolla debidamente el punto, concluyendo acertadamente que los asistentes de la educación, aun cuando dispongan de un estatuto o normativa especial, igualmente detentan la calidad de trabajadores, así como la demandada, la de empleador.

En este contexto, surge la aplicación del artículo 420 del Código del Trabajo que otorga competencia a los Juzgados de Letras del Trabajo para conocer las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores, sin que se excluya a los trabajadores que se encuentran sujetos a un estatuto especial, salvo que queden excluidos por aplicación del artículo 1, es decir, por tratarse de una cuestión específicamente regulada en sus propios estatutos, que no es el caso de autos. Por estas razones, la primera causal de nulidad es desechada.

5.- Que como segundo capítulo de nulidad de alega infracción a los artículos 51 y 52 de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; artículo 4 ley 19.464 estatuto de personal no docente; artículo 6 de la ley 10.336 Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República y artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

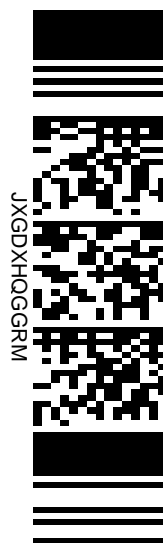
Se alega que de acuerdo a los artículos 4 de la ley 19.464 y 6° de la ley 10.336, en casos como el de autos, precisamente en cuanto a las remuneraciones del sector público, tiene aplicación el artículo 6 inciso primero de la ley 10.336 que concede en forma exclusiva y excluyente al Contralor General informar sobre las remuneraciones del personal del sector público.



En estas condiciones, en el caso concreto, atendido el pronunciamiento de la Contraloría General de la República en Dictamen 20.107, de 14 de noviembre de 2016, habiéndose generado un pago improcedente, se da un enriquecimiento ilegítimo en favor de los funcionarios, surgiendo para éstos la obligación de reintegrar las sumas mal percibidas, constituyendo a la inversa, un deber del municipio hacer efectivas tales devoluciones.

Sobre el presente punto, cabe consignar que los recursos de protección referidos por la recurrente, precisamente dan cuenta de una decisión adoptada en el marco de un procedimiento especial y estrictamente cautelar, en cuya virtud se resolvió que, tratándose de derechos dubitados, que suponen para la decisión un juicio de lato conocimiento, la Corte se encontraba vedada de emitir un pronunciamiento acorde a lo solicitado por los recurrentes. En estas condiciones, siendo la presente la sede indicada, de lato conocimiento, en que corresponde dilucidar el tema en cuestión, Dado que a los trabajadores demandantes se les aplican las normas del Código del Trabajo en cuanto a la regulación de su relación, se concluye con acierto en el considerando cuadragésimo quinto que a los actores demandantes se les aplican las normas del Código del Trabajo, razón por la cual el incremento demandado, con origen en la convención entre las partes, y en los decretos dictados por la autoridad municipal que aprueban el pago de dichas sumas, debe entenderse de origen laboral. De esta manera, la nulidad debe ser rechazada igualmente en razón de este motivo.

6.- Seguidamente se esgrime una infracción a los artículos 168 y 453 del Código del Trabajo, fundado en que se acoge la demanda no obstante que el artículo 168 establece un plazo de



60 días hábiles para ejercer acciones laborales contados desde la fecha de ocurridos los hechos de vulneración de la legislación laboral. Teniendo su origen las prestaciones que se cobran en los años 2016 y 2017, las demandas ingresadas lo han sido durante junio, agosto y octubre de 2022, con lo que acorde al artículo 453 del Código del Trabajo, era procedente acoger la excepción de caducidad.

No obstante, atendida la materia específica que informa la presente Litis, no cabe sino concluir que las acciones ejercidas no tienen determinado un plazo de caducidad, ni un tiempo legal específico para su interposición, razón por la cual, como adecuadamente se razona en el considerando trigésimo sexto de la sentencia recurrida, el plazo en este caso depende del plazo de prescripción del respectivo derecho personal, no de caducidad, razón por la cual cabe rechazar la nulidad esgrimida en razón de este motivo.

7.- Que finalmente, en relación último capítulo de la nulidad, se alega infracción al artículo 510 del Código del Trabajo, al no considerar al efecto un plazo de prescripción de dos años. Lo anterior, desde que la acción deducida se refiere a cobro de prestaciones, con relación laboral vigente; y porque las prestaciones laborales que se cobran se hicieron exigibles en la fecha de las demandas laborales, esto es, en los meses de junio, agosto, y octubre de 2022, sin que existan antecedentes previos. De esta manera, estima que los dos años a que la norma se refiere no han sido considerados, existiendo una falta de aplicación e la norma, que implica su infracción.

Sin embargo de lo anterior, como acertadamente se expone en el considerando cuadragésimo de la sentencia impugnada, la materia ha sido zanjada por la Excma. Corte Suprema en causa



de unificación de jurisprudencia Rol N° 1.994-2022, en el entendido que, encontrándose vigente la relación laboral entre las partes, y entendiendo que la exigibilidad del derecho solo es posible de entender desde el término de la relación laboral, supuesto que el Derecho del Trabajo busca proteger a la parte más débil de la relación, esto es, el trabajador, con lo que igualmente cabe descartar en este caso una infracción legal.

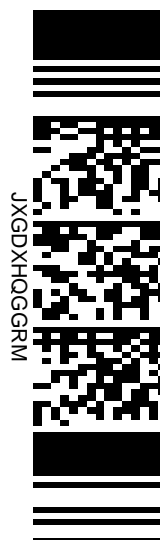
8.- Que en las condiciones descritas, por no darse en la especie los supuestos de la causal de nulidad que se pretende, tanto en el capítulo principal como los tres subsidiarios, procede el rechazo del recurso interpuesto.

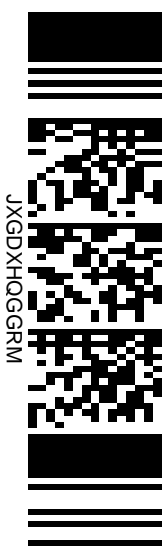
Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 477, 481 y 482 del Código del Trabajo, **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad deducido por doña Aniela Bastidas Salgado, por la parte demandada, en contra de la sentencia de ocho de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras y del Trabajo de Lota, la que en consecuencia no es nula.

Regístrese y devuélvase oportunamente al Juzgado de origen.

Redactada por el Ministro Gonzalo Rojas Monje.

N° Laboral - Cobranza-450-2023.





JXGDXTHQGRM

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción integrada por Ministra Presidente Carola Rivas V. y los Ministros (as) Mauricio Danilo Silva P., Gonzalo Rojas M. Concepcion, cinco de septiembre de dos mil veintitrés.

En Concepcion, a cinco de septiembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

